

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 24º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-20452-2023  
CARATULADO : MALDONADO/CONSEJO DE DEFENSA  
DEL ESTADO

Santiago, quince de enero de dos mil veinticinco

### VISTOS.

Con fecha 09 de diciembre de 2023, al folio 1, don Patricio Rodrigo Hernández Maldonado, abogado, con domicilio en Paseo Huérfanos N°1117, Oficina 529, comuna de Santiago; y/o O'Higgins 380, oficina 51, Edificio Cervantes, comuna de Valdivia, en representación de don Félix Maldonado Soto, chileno, casado, pensionado, domiciliado en Sector Piedra Azul, sin número, carretera Austral, comuna de Puerto Montt; interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario de Hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado en su Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, abogado, o por quién le subrogue o reemplace legalmente en su oportunidad, domiciliados en Agustinas N°1225, piso 2, comuna de Santiago, para que se reconozca y declare la responsabilidad del Estado de Chile en la comisión de los delitos de lesa humanidad y actos de detención ilegal, prisión y tortura, ejecutados por diversos miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas, durante la Dictadura Militar, a los cuales se vio sometida la víctima / demandante, solicitando en definitiva que se condene al Fisco de Chile a indemnizar a la víctima por la suma total de \$200.000.000, con costas.

Indica que, don *Félix Maldonado Soto* se encuentra calificado por La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, como la Víctima N°13798.

Testimonio de don Félix Maldonado Soto: “*Con 22 años, militante del Partido Socialista, dirigente gremial del parque Santa Mónica en Santiago que pertenecía a la comuna donde yo vivía y trabajaba, desde allí*



«RIT»

Foja: 1

*formábamos grupos y núcleos del Partido Socialista, también antes de los años 70 forme el bucle en Pampa Irigoin en la comuna de Puerto Octay, Rio Blanco Chapuco donde vivimos. Mi padre era un dirigente de obreros campesinos llamado “El progreso”, en el cual ayude a formarlos, mi padre hacia un pliego de peticiones y presentaba a los dueños de los fundos cuando ellos no respetaban ni aceptaban las peticiones, los obreros se tomaban el fundo y nosotros estábamos acompañando para asesorarlos. Donde vivíamos era un lugar manejado por fascistas, lo que nosotros hacíamos era mal mirado en cuando nos oponíamos a ellos, nos denunciaban y mandaban a los carabineros a cada vez que querían. Tanto odio hacia nosotros era porque fuimos los fundadores del Partido Socialista (mi padre y hermanos) todo esto fue un poco antes del golpe, parece que sabían lo que iba a pasar, nos mandaban presos cuando ellos querían nos inventaban motivos, total ellos eran amos y señores de ese lugar, siempre mandados por el capitán Fernández. En Santiago, después del golpe militar fui parte del núcleo de la reorganización de la izquierda y ayudaba a que la gente supiera quienes los mataban, en la zona de recoleta un día me tomaron detenido, me llevaron y me torturaron hasta que creyeron que estaba muerto y me tiraron a la calle. Cuando me recuperé me escondí y cuando ellos se enteraron que estaba vivo me buscaron por muchas poblaciones, que en ese momento fue donde decidí (porque no me quedó otra) pedir asilo en alguna embajada, fue así como casi sin poder caminar me fui a la embajada Mexicana a pedir ayuda y me la negaron. Después de caminar tanto me encontraron los carabineros y me empezaron a seguir, me disparaban y sentía que las balas pasaban al lado mío, fui así como llegué (casi de casualidad) a la embajada italiana donde por milagro alcancé a entrar junto con algunos compañeros, entre ellos estaban compañeros de la GAP. Ahí fui atendido enseguida por un médico ya que tenía un problema pulmonar; por los golpes escupía sangre y me encontraba muy mal, pero el gobierno no nos dejaba salir a Italia. Nos negaron el salvo conducto y estuvimos peleando 3 meses para que nos den la salida. Debido a esto todavía vivo en Italia ya que en Chile no tengo nada, perdimos todo y toda la familia fue perseguida y torturada. No vi a mi familia por 26 años, no sabía nada de ellos pensaba que estaban muertos y cuando salí en el*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXPZQEG

«RIT»

Foja: 1

*listado para retornar a mi país no pude hacerlo porque no me dejaron, ese fue el año 90 antes del comienzo de la democracia. La familia que nos hospedaba en su casa en ese tiempo, todos fueron muertos, primero los torturaron y después los mataron y quemaron sus casas, eso paso en la población Barracas.”*

Señala que, durante su detención describe que sufre tratos inhumanos como: Agresiones psicológicas como amenazas de sufrir un mal mayor; mínimas condiciones de abrigo, alimentación e higiene, medios de torturas y agresiones físicas (golpes, simulacros de fusilamiento); aislamiento; consecuencias psicológicas posteriores como temor a los ruidos de armas, alteraciones del sueño; neurosis de angustia, inseguridad, depresión, stress post traumático, pensamientos constantes de negatividad sobre la vida, familia y su futuro. Separación forzada de su familia y del país. De los relatos o descripciones que anteceden y que fueron acompañados ante la comisión de Verdad y Justicia se tuvieron por acreditados como víctimas de la persecución política. Sufriendo la detención ilegal, prisión y tortura en el cuartel de carabineros en Recoleta Santiago, en el mes de octubre 1973, por un total de 15 días aproximado. Permanece refugiado en la embajada de Italia hasta tramitar su exilio hacia ese país. Donde hoy continúa viviendo. Sin duda alguna, estos graves hechos produjeron en las víctimas una profunda frustración, acompañada de una desconfianza a tal nivel de inhabilitarlos social y emocionalmente. La discriminación política y cesantía agudizó sus problemas. Aún presenta secuelas de daño psicológico producido, manifestando estrés postraumático y depresión.

Sostiene que, los hechos descritos se encuentran en el Catálogo de Crímenes de Lesa Humanidad, reconocidos por la Comunidad Internacional según lo establecido en el artículo 6 letra C del Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg (1945), declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas (1946) y ratificado con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). También hacen mención a ellos en: La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Convención de Ginebra (1949) y Protocolos adicionales, Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad (1968), Pacto de San José de Costa Rica (1969), Pacto



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Convención de Viena (1969), Convención para la prevención y sanción del genocidio y la convención de la tortura (1948), y que se encuentran incorporados al ordenamiento chileno por la Constitución Política de la República (1980), Código Civil, Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales del Estado N°18.757 y la ley N°20.874 sobre el aporte reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile. Este tipo de crímenes ignominiosos e intolerables para la humanidad han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional.

Invoca para su pretensión lo previsto en los artículos 1, 5, 6, 7, 19, 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración N°18.575; Carta de la Organización de los Estado Americanos; Carta de las Naciones Unidas; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

Rechaza la aplicación de normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, por no tratarse de un delito común, ante lo cual, la acción de reparación sería imprescriptible, según normas de derecho internacional, en especial los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos, que consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos quedando sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, que avalaría su pretensión.

Agrega que, concurrirían los requisitos para indemnizar, pues, en el caso Ad Litem, concurrirían los requisitos que obligan al Estado a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

Indemnizar los perjuicios causados: 1) En cuanto al daño moral, como se expresó por el solo hecho de haberse producido los actos de detención y tortura, acreditados en este caso, aquel daño se presume. 2). La acción u omisión proviene de la actividad lesiva del Estado, y existe un vínculo de causalidad entre estos dos elementos, el cual permite atribuir material y objetivamente un resultado dañoso a la acción de la Administración.

Refiere sobre la procedencia de la indemnización del daño moral, la responsabilidad del Estado debe ser integral, es decir, debe repararse todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones, que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo, se hace necesario acudir al derecho común.

Finalmente, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra del Fisco de Chile, y, en definitiva hacer lugar a ella en todas sus partes, acogiéndola y condenarlo a pagar la suma total de \$200.000.000, a beneficio del demandante, don *Félix Maldonado Soto*, por concepto de daño moral, más reajustes e intereses, desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que se estime ajustada a derecho, a equidad y al mérito de estos autos, con costas.

Con fecha 07 de febrero de 2024, al folio 7, contesta la demanda el Fisco de Chile, solicitando su rechazo, con costas, o en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, con fundamento, en primer lugar, en la excepción de reparación integral, por haber resultado ya indemnizado el actor, dado que conforme al ámbito de la llamada justicia transicional, se establecieron medios de reparación, por los cuales el Estado ha desembolsado a diciembre de 2019 la suma total de \$992.084.910.400. En lo tocante al caso de marras, el actor habría recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N°19.992 y sus modificaciones. Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se pueda valorizar para saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Se agrega que concedieron otros derechos, como gratuidad en prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud en los servicios de salud del país, con la sola inscripción en la correspondiente oficina, cuyo programa cuenta con equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa, que incluye apoyo técnico y rehabilitación física; cuyo presupuesto, el año 2020, alcanzó a la cantidad de M\$6.543.883; en el ámbito educacional, se concedieron becas de estudios superiores y beneficios en vivienda a través de subsidios.

Indica que lo anterior, es sin perjuicio, de las reparaciones simbólicas, como actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Expresa que, a través de diversas sentencias, tanto de tribunales nacionales como internacionales, ha valorado el esfuerzo del Estado de Chile, en su política de reparación de violaciones a los derechos humanos e, incluso, ha rechazado pretensiones indemnizatorias de personas que ya han recibido beneficios del Estado por ese motivo.

Opuso, además, en subsidio, la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, la que sustentó en lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal, considerando que aún, pudiendo entenderse suspendida la acción durante la dictadura militar, por imposibilidad de la víctima de poder ejercer dicha acción, igualmente desde la restauración de la democracia habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción, como también, el plazo de extinción ordinaria del artículo 2515 del Código Civil, por lo que, en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no sería aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Manifiesta que la imprescriptibilidad es una cuestión extraordinaria y requiere, siempre, de declaración explícita, que en el caso no existiría, además, que la indemnización, en caso alguno, puede tener un carácter punitivo, ni de desigualdad, precisando que ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos aludidos por el actor establecen la imprescriptibilidad de acciones patrimoniales derivadas de delitos de lesa humanidad, ni prohíben la aplicación del derecho interno, citando y reproduciendo al efecto un fallo de la Corte Suprema de unificación de jurisprudencia, de 21 de enero de 2013.

Alega, por otra parte, que la indemnización pretendida resultaría excesiva, en subsidio, regular el daño moral, considerando los pagos ya recibidos del Estado.

En cuanto al pago de reajustes e intereses, hizo presente que solo procederían una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dado que solamente en esa época se establecería la obligación.

Con fecha 04 de marzo de 2024, al folio 11, replica el actor, reiterando lo expresado en su demanda y señalando, respecto de la excepción de reparación integral, que los pagos, si bien han tendido a reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, solo corresponden a pensiones de asistencia, que no cubren todo el daño y dolor producidos, y el Estado no ha fijado un monto de reparación, agregando que la pensión de reparación, según ley 19.123, es compatible con cualquier otra, siendo los tribunales los llamados a fijar reparación de un daño moral, por violación a los derechos humanos.

En cuanto a la prescripción, reiteró su alegación de la supuesta imprescriptibilidad de la acción civil deducida, precisando la acción tendría carácter constitucional, según lo previsto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, complementada por el artículo 4 del D.F.L. 19.653, que refunde la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, recalcando que el Estado debe responder por los daños ocasionados.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

Precisa que al faltar norma expresa que regule la prescripción de las acciones de reparación por violaciones a los derechos humanos, debe aplicarse el derecho público como el derecho internacional.

Respecto del monto demandado, reiteró lo expresado en su demanda, señalando que, lo solicitado es en virtud del daño ocasionado al actor y familia, el tiempo sometido a la prisión ilegal, las torturas y secuelas producidas, todas las consecuencias que producen estos factores en su conjunto.

Por último, sobre los reajustes, sostiene que es el juez de instancia quien determina la cuantía de las reparaciones, por lo que, procede que estas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia.

Con fecha 04 de abril de 2024, al folio 18, duplica la demandada, reiterando lo expresado en su contestación y aludiendo a sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013, en los autos Rol N°10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”.

Con fecha 18 de octubre de 2024, al folio 23, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

Con fecha 03 de enero de 2025, al folio 51, se citó a las partes para oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, don Patricio Rodrigo Hernández Maldonado, abogado, en representación de don Félix Maldonado Soto, interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario de Hacienda, contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, abogado, o por quién le subrogue o reemplace legalmente en su oportunidad, para que se conozca y declare la responsabilidad del Estado de Chile en la comisión de los delitos de lesa humanidad y actos de detención ilegal, prisión y tortura, ejecutados por diversos miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas, durante la Dictadura Militar, a los cuales se vio sometido el demandante, solicitando en definitiva que se condene al Fisco de Chile a indemnizar a la víctima por la suma total de \$200.000.000, con costas.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG



«RIT»

Foja: 1

Funda su pretensión en los argumentos de hecho y fundamentos de derechos relatados latamente en lo expositivo del presente fallo.

Por su parte, la demandada, pidió el rechazo de la demanda, o en su caso la rebaja sustancial en el monto indemnizatorio, conforme a los hechos y argumentos de derechos ya descritos, en forma lata, en la parte expositiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Que han resultado hechos no controvertidos en el proceso, aceptados por ambas partes, que el actor es, efectivamente, una víctima de violación de derechos humanos durante el desarrollo de la Dictadura Militar, y que el Estado ha efectuado acciones de reparación, mediante pensiones asistenciales y simbólicas.

**TERCERO:** Que la discusión esencial del pleito judicial ha rondado en cuanto a si las acciones de reparación efectuadas por el Estado habrían sido suficientes para reparar el daño sufrido por el actor; en si la acción deducida se encontraría prescrita; como también, en si la pretensión indemnizatoria del actor resultaría desproporcionada, relacionado ello con la extensión que habría tenido el daño moral que padeció el actor.

**CUARTO:** Que el actor rindió la siguiente prueba, a fin de justificar sus argumentos:

Documental:

1) Certificado de nacimiento de Félix Maldonado Soto. SRCI. 2) Listado nómina de víctimas informe Valech N°13798, documento agregado al folio 1.

3) Documentación acreditación Informe Valech. Museo de la Memoria. INDH. Certificado Copia del original. 14 pág), documento agregado al folio 1.

4) Copia “Efectos físicos y psíquicos en los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos”. Enero 2018. Directora Ejecutiva ONG Iilas, documento agregado al folio 1.

5) Copia Cuadernos de Psicología Jurídica N°1 Año 2004. “El proceso de traumatizaron en personas afectadas por terrorismo de estado. Un desarrollo conceptual”. Ps. Gálvez, Ps. Pastrana, Ps. Venegas, documento agregado al folio 1.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

6) Beneficios establecidos por la Ley a las víctimas y familiares de violaciones ocurridas durante dictadura. INDH, documento agregado al folio 1.

7) Copia - PRAIS “Norma técnica para la atención en salud de Personas Afectadas por la represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973–1990”, documento agregado al folio 1.

8) Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Propiedad Intelectual 145246 de 04/02/05. I.S.B.N 956-7808-47-3. Fuente <http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2017/01/informe.pdf>, documento agregado al folio 1.

9) Copia de Certificado. Arzobispado de Santiago Fundación documentación y archivo de la Vicaria de la Solidaridad, de don Félix Maldonado Soto de fecha 8 Abril 2024. (3 páginas), documento agregado al folio 26.

10) Copia de Certificado Departamento Salud Mental de Adultos. Servicio Sanitario Regional, de don Félix Maldonado Soto, de fecha 6-6-2024. (6 páginas), documento agregado al folio 29.

Documentos agregados legalmente al proceso, no objetados.

Testifical:

Rendida en la audiencia de 22 de octubre de 2024, al folio 28, por los testigos don Alex Dan Toledo García y don Juan Enrique Queupumil Treupíl, quienes, legalmente examinados y sin tacha, quienes declararon:

El primero, don Alex Dan Toledo García, preguntado al tenor del primer punto de la interlocutoria de prueba, indica que:

*“Yo sé que don Félix Maldonado por el año 1973, en el mes de octubre, fue detenido por Carabineros de la Comuna de Recoleta, donde estuvo detenido más o menos como quince días, y en esa Comisaría él fue torturado y golpeado hasta quedar inconsciente, después de esos en el mismo estado de inconsciencia él fue abandonado en el centro de Santiago en el cual unos desconocidos le prestaron ayuda y al momento de recuperarse de la inconsciencia buscó ayuda en un asilo italiano el cual le prestó ayuda para extraditarlo a Italia y allí permaneció como 25 años incomunicado con la familia y durante esos años la familia lo había dado*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

*por muerto. Esto me consta por haber tenido por comentarios de la familia de él.*

Al punto de prueba número dos, indica que, *“Yo conocí a don Félix cuando volvió de Italia y desde ese tiempo he visto que quedó con secuelas después de su detención como mucho miedo a Carabineros y lo he visto toser mucho y tampoco le gusta dormir en espacios reducidos. No sé el monto que él está cobrando en este juicio para compensar los daños provocados por los agentes del estado. Yo creo que ningún monto es compensatorio para reponer el daño provocado”.*

Preguntado a los puntos 3 y 4, señaló remitirse a lo ya señalado.

Interrogado al punto cinco de la interlocutoria de prueba, acerca de haber existido una reparación de los eventuales daños sufridos por el demandante, o haber sido ya indemnizado por parte del Fisco de Chile por la misma causa, en su calidad de prisionero político y torturado, indicó desconocerlo.

Preguntado al punto seis, acerca de la época de ocurrencia de los hechos en que se funda la demanda contestó que en el mes de octubre del año 1973.

El segundo, don Juan Enrique Queupumil Treupíl, interrogado sobre el primer punto de prueba, contestó que: *“Sé que don Félix Maldonado, fue detenido por agentes del Estado en la comuna de Recoleta Región Metropolitana, en el mes de octubre del año 1973, donde estuvo detenido en una Comisaría de Carabineros por quince días y dentro de ese tiempo fue torturado, golpeado tanto físico como psicológicamente, privándolo de lo básico como es la comida y vejámenes. Después de los quince días ya casi moribundo fueron a botarlo a la vía pública y en ese instante fue por un transeúnte ayudado y ahí recuperándose de sus sentidos él fue a pedir asilo a la Embajada de Italia y lo hizo por temor a su vida. Estuvo como tres meses en la embajada y posteriormente lo ayudaron para que se trasladara a Italia, donde actualmente él vive.*

*Esto me consta porque tengo cierta relación de amistad con el hermano de él y el me relato los hechos.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

*Posterior a esos en uno de sus viajes a Chile lo conocí y me relato lo mismo que me había contado su hermano, ratificado lo sucedido en su detención.”*

Preguntado al punto dos, señaló: *“Esos daños personales él solamente sabe lo que necesita yo lo vi y hasta los días de hoy tiene secuelas físicas y psicológicas igual, porque aún tiene el pánico al ver a Carabineros ya que se le viene el recuerdo de las torturas sufridas por estos agentes del estado.”*

Al punto tercero, indica remitirse a lo ya señalado.

Al cuarto punto de prueba, contestó: *“Lo que me consta es que los daños que él sufrió fueron provocados por agentes del estado.”*

Preguntado al quinto punto de prueba, refirió: *“Sé que no le han hecho ninguna reparación monetaria ni psicológica ni nada.”*

Finalmente, al sexto punto de prueba, explicó: *“Como dije anteriormente los hechos fueron en el mes de octubre del año 1973, provocados por Carabineros.”*

**QUINTO:** Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba documental para justificar sus defensas o desvirtuar los argumentos y pruebas del actor:

Oficio ORD DSGT N°21549/2024, de 22 de marzo de 2024, emitido por Instituto de Previsión Social, acompañado al folio 14, con fecha 25 de marzo de 2024, no objetado.

**SEXTO:** Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes. En este sentido, no se registran impugnaciones, fundadas en causal legal, respecto de ninguno de los documentos que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza y se tienen como instrumentos públicos en juicio, los que tengan dicha naturaleza.

La testifical rendida por el actor, por dos testigos legalmente examinados, sin tacha, que han dado cuenta de sus dichos, cuyas declaraciones resultan coherentes y están contestes en sus circunstancias esenciales, la que no ha resultado desvirtuada por prueba en contrario, permiten a este tribunal establecer, como plena prueba, que la detención,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

torturas y exilio sufrido por el actor, han provocado secuelas físicas, psicológicas y emocionales en él.

**SÉPTIMO:** Que conforme a los hechos reconocidos por las partes, se debe tener como hechos justificados en el proceso, la veracidad de haber sido el actor un prisionero político del régimen militar en dictadura, producido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, y víctima de violación a los derechos humanos, por torturas efectuadas por agentes de dicha Dictadura Militar; y que resulta efectivo, también, que el actor ha sido beneficiado con reparaciones de parte del Estado, por su calidad de víctima de torturas, recibiendo, al menos, ciertas pensiones asistenciales, lo cual se desprende del reconocimiento efectuado en el escrito de réplica, donde las estimó insuficientes.

**OCTAVO:** Que previo a verificar si se dan los presupuestos para acceder a la responsabilidad extracontractual del Estado, por acciones de sus agentes, deberá revisarse si se dan los presupuestos legales para acceder a la primera defensa argumentada por el Fisco de Chile, esto es, la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización por ese motivo.

**NOVENO:** Que la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización, deducida por el demandado, se ha sustentado, esencialmente, en haberse producido una reparación del daño moral del actor por dicha parte, conforme a lo previsto en la Ley N°19.123, y en que el actor habría recibido, puntualmente, beneficios de la Ley N°19.992 sobre prisioneros y torturados políticos, en virtud de haber sido calificado como víctima de presión política y tortura del Informe de la Comisión Valech, bajo el número 19.975, consistente en pensión asistencial; un aporte único de reparación Ley 20.874, de \$1.000.000, además, de beneficios en derecho de gratuidad en prestaciones médicas, según Ley N°19.234, otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, en todos los servicios de salud públicos del país, que comprenden profesionales de atención exclusiva; beneficios educacionales, consistentes en becas para la víctima, para un hijo o para un nieto de aquel; y beneficios de vivienda, correspondientes a subsidios para tal efecto.

**DÉCIMO:** Que como ya ha quedado asentado en la motivación séptima, el actor ha reconocido en juicio, en su escrito de réplica, que son



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

efectivas las prestaciones económicas que ha percibido del Estado, en su calidad de víctima de prisión política, tortura y exiliado político y que, por tanto, se le ha hecho pago de diversas sumas que comprenden tales beneficios, no precisados por él.

Por otra parte, conforme el mérito del informe remitido por Instituto de Previsión Social, de fecha 22 de marzo de 2024, agregado al expediente digital con fecha 25 de marzo del mismo año, en folio 14, no objetado, puede establecerse por el tribunal, fehacientemente, que el actor ha percibido como beneficios de reparación de las leyes números 19.992 y 20.874, desde marzo de 2005 a febrero de 2024, las sumas de \$34.849.655, por concepto de pensiones asistenciales Ley 19992; de \$1.000.000, referido a aporte único Ley N°20.874; \$659.680, por concepto de aguinaldos, siendo el total percibido de \$36.509.335, correspondiendo la pensión actual de esa época a \$264.898.

**UNDÉCIMO:** Que según lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°19.123, en su parte pertinente, se dispone: *“Le corresponderá especialmente a la Corporación:*

*1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.”*

De acuerdo con dicha disposición legal, resulta evidente que el objeto de las prestaciones que dicha norma contempla, están destinadas a la reparación de las víctimas de presión política y tortura, como es el caso del actor de autos.

**DUODÉCIMO:** Que de las demás disposiciones de la citada Ley N°19.123, que se refiere a la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y que establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que señala, resulta de manifiesto el esfuerzo que ha efectuado el Estado de Chile, para reparar, al menos en parte, el daño sufrido por las víctimas de tortura y prisión política durante el régimen militar, a través de la estructuración de pensiones y otros beneficios para los afectados y su grupo familiar, como también, reparaciones simbólicas, referidas a la memoria de los excesos y delitos cometidos en contra de las víctimas de torturas y prisión política de la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

Dictadura Militar, como memoriales, monumentos, efemérides, museos y otros.

Cabe agregar que la estructura y prestaciones disponibles para el demandado, en materia de salud y de forma preferente, a través del programa PRAIS, implican un valor monetario adicional a disposición del actor, independientemente de si éste opta o no por ocuparlos, lo que ocurre, también, con los beneficios de educación y vivienda.

**DÉCIMO TERCERO:** Que conforme a lo asentado precedentemente y lo reconocido por el actor en el proceso, debe tenerse por efectiva la reparación integral que ha efectuado el Estado con motivo de las torturas y prisión política que padeció de parte de agentes del Gobierno Militar en Dictadura, reparación que de acuerdo a las circunstancias y la capacidad económica del Estado de Chile, debería estimarse suficiente, considerando, por una parte, que las torturas y dolor infringido al demandante, jamás podrían ser reparadas con suma alguna, pero también por otro lado, que el Estado también ha sido víctima de un gobierno de facto, que alteró la institucionalidad, precisamente, por los órganos llamados a defender al Estado y a las personas que lo componen.

A mayor abundamiento, debe considerarse, también, que ha sido el propio Estado de Chile, el que ha propendido acciones para poder establecer quienes han sido víctimas de tortura y prisión política, durante el régimen militar, para poder, precisamente, tratar de efectuar las reparaciones que en Derecho corresponden, bajo un procedimiento administrativo más simplificado y que opera bajo el principio de la buena fe, evitando la judicialización del establecimiento de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos.

**DÉCIMO CUARTO:** Que sin perjuicio de lo anterior, la interpretación sistemática de las normas dispuestas por las Leyes 19.123 y 19.992, permite deducir que la bonificación de reparación instaurada en favor de ciertos familiares de ejecutados políticos y de víctimas directas de delitos de lesa humanidad, constituye un beneficio de carácter social, no una indemnización del daño moral sufrido por éstas, pues, en la determinación de su cuantía no se aprecia que se hayan considerado elementos particulares y/o personales de quienes soportaron dicho sufrimiento; requisito esencial a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

Foja: 1

la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un perjuicio cierto y determinado, no existiendo una incompatibilidad entre dichas compensaciones y aquellas que legítimamente y por vía jurisdiccional pretendan las víctimas, cuando se aprecie la existencia de un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874, no pueden substituir la pretensión de compensación del daño moral soportado por el actor, añadiéndose que los beneficios conferidos por dichas normas sólo apuntan a edificar políticas asistenciales del Estado, respecto de los familiares de las víctimas o de ellas mismas, sujetas a condiciones objetivas, lo que evidencia que no se trata de una reparación total y efectiva del daño sufrido por las víctimas.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, como consecuencia de lo razonado en las motivaciones anteriores, deberá acogerse parcialmente la excepción de reparación integral, deducida por la demandada, por haber sido ya indemnizado de manera objetiva el actor en virtud de ello en los términos expuestos precedentemente, considerándose dicha reparación solo con la finalidad de determinar el quantum del monto a indemnizar por daño moral.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, sin perjuicio de lo referido precedentemente, deberá determinarse, a continuación, si se dan los presupuestos de derecho para poder acoger la excepción de prescripción opuesta, en forma subsidiaria.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Respecto a la prescripción de la acción en materia de derechos humanos se debe considerar, que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6° inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, preceptos que, de aceptarse la tesis de la defensa, quedarían sin aplicación, siendo obligatoria su observancia, que por su parte los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por ilícitos de esta clase, queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas, ni hacer primar el derecho interno, dado que ilícitos imputable a un Estado,





«RIT»

Foja: 1

surgiendo de esa forma la responsabilidad internacional de éste por la violación de una normas de Derechos Humanos y como consecuencia nace el deber de reparación y de cesar los actos de vulneración denunciada.

De esa forma las normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales de justicia, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación, pues ello comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile, ya que, el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, se hace necesario destacar que en los sucesos reseñados y que constituyen el fundamento de la acción, intervinieron agentes del Estado, lo que evidencia una contravención a lo preceptuado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella, a las normas dictadas conforme a la misma y al artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de aquellos respetar y promover tales derechos garantizados. Esta última disposición constitucional hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

Así las cosas al tratarse el presente caso de una demanda civil que se sustenta en un delito que, de acuerdo a la conciencia jurídica se denomina de “*lesa humanidad*”, se puede concluir que tal calificación no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito y declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que también implica la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

Foja: 1

inviabilidad de proclamar la extinción, por el solo transcurso del tiempo, del derecho de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito cuya existencia ha sido pacífica, de forma tal que este tipo de ilícitos, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, conforme lo señalado, se concluye que procede de la indemnización que se reclama, atendiendo al contexto en que se verificó el delito, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechores -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos de tal gravedad, que imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como se desprende del bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anterior, ahora cabe determinar el *quantum* del detrimento resultado de los agentes del estado, a lo cual se considera lo complejo de su determinación, dado que ningún monto podrá resarcir completamente a la ofendida, ni restablecerla a la situación anterior al acaecimiento de los hechos.

Sin embargo, la indemnización por daño moral es meramente satisfactoria, lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio que le permita a la víctima atenuar el daño.

**VIGÉSIMO:** Que, en relación con lo anterior, ha quedado demostrado que el actor, don *Félix Maldonado Soto*, fue víctima de violaciones a los derechos humanos, puesto que sufrió privación ilegítima de libertad y torturas por razones políticas, perpetrada por agentes del Estado, en los términos y magnitudes que se consignaron en este fallo. Luego, la pretensión indemnizatoria, claramente deriva de los padecimientos físicos y



«RIT»

Foja: 1

emocionales que ha tenido que sobrellevar; hechos que además, que no han sido objeto de contradicción, dando cuenta del estrés post traumático de carácter grave y extenso que afecta al actor, alteraciones en su salud mental producto de los acontecimientos que debió enfrentar como víctima de prisión política y tortura; y por lo tanto, conforme a la experiencia científica, los menoscabos permanentes en la salud mental y física de las víctimas de este tipo de ilícitos.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, con todo lo señalado, la cuantificación del daño se hará prudencialmente por el tribunal, habida consideración la naturaleza, entidad y extensión del mismo, teniendo para ello especialmente presente, las circunstancias en que se produjeron los hechos, la edad del actor a la época en que fue detenida e ilegítimamente apremiado; la duración y entidad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos; y los montos judicialmente asignados tanto a las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos en causas similares, como a los hijos y padres de ejecutados políticos.

La suma que se fijará a título de indemnización deberá pagarse reajustada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada y su pago; así reajustada, devengará intereses corrientes para operaciones reajustables en el mismo lapso.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que la demás prueba rendida, no detallada o considerada en forma especial, en nada incide en lo asentado precedentemente.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que en cuanto a las costas de las causa cada parte soportará las propias, debido a no haber resultado totalmente vencida la demandada.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254 y siguientes, 342, 399, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1º, 4º, 6º, 7º, 19, 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG

«RIT»

Foja: 1

Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Los Convenios de Ginebra de 1949; Principios de Núremberg; y art.7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se declara:

**I.-** Que **se acoge**, la demanda deducida en lo principal del escrito de 09 de diciembre de 2023, al folio 1, y se condena al demandado, Fisco de Chile, a pagar al actor, don Félix Maldonado Soto, la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

**II.-** Se **acoge parcialmente** la excepción de reparación integral del Estado.

**III.-** Se **rechaza**, la excepción de prescripción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.

**IV.-** Que cada parte soportará sus costas.

**Anótese, regístrese y notifíquese.**

Pronunciada por doña **Cecilia Pasten Pérez**, Juez Suplente./dbh

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, quince de enero de dos mil veinticinco



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UXXHXSPZQEG